



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

JUEZ DIECISEIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Correo electrónico: adm16cali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: PODER ESPECIAL
Radicación: 2021-00247
Demandante: DIANA MARÍA ORDÓÑEZ CAMPO Y OTROS
Demandado: Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de
Servicios de Santiago de Cali
Medio de control: REPARACION DIRECTA

MARÍA DEL PILAR CANO STERLING, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.869.025 expedida en Cali (V), en mi condición de Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali¹, nombrada mediante decreto No 4112.010.20.0001 del 1 de enero de 2020 y acta de posesión No. 0007 del 1 de enero de 2020, debidamente facultada por el Doctor JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.342.414 expedida en la Cumbre (V), en su condición de Alcalde del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y Representante Legal del mismo, según Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020² a conferir y/o revocar poderes especiales con las facultades de ley, para la atención de los procesos, lo cual acredito con copia del precitado decreto y de los documentos que certifican tal condición, manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a la Doctora GLORIA AMPARO PÉREZ PAZ identificada con la cédula de ciudadanía número 31.853.521 abogada titulada con Tarjeta Profesional número 62.510 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, actúe dentro del proceso referido, con la facultad expresa de ejercer todas las acciones en defensa de los intereses del ente territorial.

La apoderada del Distrito Especial de Santiago de Cali, además de las facultades expresamente consagradas en el artículo 77 de la ley 1564 de 2012, queda facultada para actuar en todas las etapas procesales y conciliar conforme a la autorización que otorgue el comité de conciliación de la administración central del Distrito Especial de Santiago de Cali, cuya determinación deberá constar en el acta pertinente y realizar todas las demás acciones inherentes al presente mandato.

Para que se dé estricto cumplimiento al artículo 196³ del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, manifiesto que como parte, la notificación de las providencias que se proferían en el desarrollo del proceso, las recibiré en el correo electrónico notificacionesjudiciales@cali.gov.co, buzón de correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales para el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali a que se refiere el artículo 197⁴ de ese código.

¹ Ley 1933 de 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE CATEGORIZA AL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI COMO DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y SERVICIOS

² Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UNA DELEGACIÓN EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

³ ARTÍCULO 196. NOTIFICACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias se notificarán a las partes y demás interesados con las formalidades prescritas en este Código y en lo no previsto, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil

⁴ ARTÍCULO 197. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES. Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. Para los efectos de este Código se atenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.

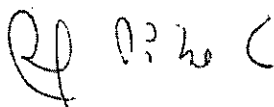
La Doctora GLORIA AMPARO PÉREZ PAZ con el fin de que ejerza eficazmente el presente mandato como representante judicial, recibirá las notificaciones judiciales en el correo institucional notificacionesjudiciales@cali.gov.co, y en el personal gap10_19@hotmail.com el cual se encuentra inscrito en la Unidad de Registro Nacional de Abogados.

Sírvase señor Juez aceptar este mandato especial y reconocerle personería suficiente a la Doctora GLORIA AMPARO PÉREZ PAZ en los términos del presente poder.

ANEXOS

1. Copia de la Cedula de ciudadanía del señor Jorge Iván Ospina.
2. Escritura Pública No. 01 de 2020 de la Notaria Tercera del Circuito de Cali- que protocoliza el acta de posesión del Alcalde de Santiago de Cali.
3. Copia del decreto de nombramiento como Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública , No 4112.010.20.0001 del 1 de enero de 2020.
4. Copia del acta de posesión como Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública No. 0007 del 1 de enero de 2020
5. Copia del Decreto No. 4112.010.20.0024 del 10 de enero de 2020 "*Por medio del cual se efectúa una delegación en materia de Representación Judicial, Administrativa y Extrajudicial y se dictan otras disposiciones*"

Cordialmente



MARIA DEL PILAR CANO STERLING
Directora del Departamento Administrativo
Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía
Buzón de correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co

Acepto y solicito se me reconozca personería,



GLORIA AMPARO PÉREZ PAZ
C.C. No. 31.853.521 de Cali (V)
T.P. No. 62.510 del C.S. de la Judicatura.
Buzón de correo electrónico: gap10_19@hotmail.com
No. Celular: 321 6384214

Santiago de Cali, Junio 28 de 2022

Doctora
LORENA MARTINEZ JARAMILLO
JUEZ DIECISEIS ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

RADICACIÓN: 2021-00247-00
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTE: DIANA MARIA ORDOÑEZ Y OTROS
DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI
CONTESTACION DE DEMANDA

GLORIA AMPARO PÉREZ PAZ, mayor de edad, residente en Santiago de Cali, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 31.853.521 expedida en Cali (Valle), abogada titulada y en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 62.510 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en nombre y representación del Distrito de Santiago de Cali conforme con el PODER ESPECIAL conferido por el Distrito de Santiago de Cali en el presente proceso, dentro del término legal, con todo respeto presento ante su Despacho **CONTESTACION DE LA DEMANDA**, en los siguientes términos:

FRENTE A LAS PRETENSIONES:

Dentro del acápite "PRETENSIONES" de la demanda, se relacionan las siguientes:

"PRIMERA: Declarar administrativamente responsable al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, entidad de derecho público representada legalmente por su señor Alcalde Dr. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, o quien lo represente, haga sus veces o a quien sea dado el traslado de la demanda, y en consecuencia, que la parte demandada reconozca en favor de los demandantes la indemnización de perjuicios causados por la FALLA DEL SERVICIO materializada en la omisión por la falta de mantenimiento de la vía en la Avenida 2F N con Calle 55, negligencia mantenida en el tiempo, consistente en el hundimiento o desnivel de la vía que ya había provocado otros accidentes anteriores al que tomó la vida del señor JHON EDUARDO BOLAÑOS HURTADO(q.e.p.d.).

"SEGUNDA. Condenar al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, entidad de derecho público representada legalmente por su señor Alcalde, Dr. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, o quien lo represente, haga sus veces o a quien sea dado el traslado de la demanda, a pagar, a cada uno de los demandantes, por concepto de PERJUICIOS MORALES, las siguientes sumas: Para DIANA MARIA ORDOÑEZ CAMPO, compañera permanente, la suma de CIEN (100) SMLMV al momento de su efectivo pago. Para LIZETH BOLAÑOS ORDOÑEZ, hija, la suma de CIEN (100) SMLMV al momento de su efectivo pago.* Para ALVARO BOLAÑOS HENAO, padre, la suma de CIEN (100) SMLMV al momento de su efectivo pago.* Para AIDA RUBBY HURTADO, madre, la suma de CIEN (100) SMLMV al momento de su efectivo pago.* Para INGRID ALEXANDRA BOLAÑOS HURTADO, hermana, la suma de CINCUENTA (50) SMLMV al momento de su efectivo pago.* Para NICOLAS BOLAÑOS HURTADO, hermana, la*



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIÓN JURÍDICA

suma de CINCUENTA (50) SMLMV al momento de su efectivo pago.* Para DIANA BOLAÑOS HURTADO, hermana, la suma de CINCUENTA (50) SMLMV al momento de su efectivo pago.* Para GIGLIOLA BOLAÑOS HURTADO, hermana, la suma de CINCUENTA (50) SMLMV al momento de su efectivo pago. Total perjuicios morales: SEISCIENTOS (600) SMLMV600 SMMLV (x) \$ 828.116 = \$ 496.869.600

TERCERO Condenar al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, entidad de derecho público representada legalmente por su señor Alcalde, Dr. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ, o quien lo represente, haga sus veces o a quien sea dado el traslado de la demanda, a pagar, por concepto de Lucro Cesante Consolidado y Futuro, para la compañera permanente DIANA MARIA ORDOÑEZ CAMPO y para la hija del hoy fallecido la menor LIZETH BOLAÑOS ORDOÑEZ, las sumas que resulten luego de su tasación

TOTAL TODOS LOS PERJUICIOS MATERIALES. PERJUICIOS MATERIALES LUCRO CESANTE FUTURO Y CONSOLIDADO. \$ 343.072.206. TOTAL PERJUICIOS MORALES. \$ 496.869.600. TOTAL TODOS LOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES. \$ 839.941.806.

En calidad de apoderada judicial del demandado, me opongo a todas y cada una de las pretensiones, por cuanto, la evidencia allegada con la demanda, carece de poder de convicción y por tanto resulta insuficiente para enrostrar responsabilidad al Distrito de Santiago de Cali, por los presuntos daños sufridos por la parte actora.

FRENTE A LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA

Al hecho 1: No me constan, se trata de situaciones que deberán probarse en el transcurso del proceso. Sin evidencia de informe de accidente de tránsito que de cuenta de las circunstancias de modo tiempo y lugar de como sucedieron los hechos. Circunstancias fácticas que serán debatidas dentro del presente medio de control.

Al Hecho 2., es cierto Según historia clínica aportada en el traslado de la demanda

Al hecho 3: se trata de una aseveración hecha por el apoderado.

Al hecho 4: No es un hecho, se trata del resultado de la Investigación penal de la Fiscalía 35 seccional de la Unidad de Vida de la Fiscal Dra. Carmen Eugenia Cortes Delgado. Lo demás son estimaciones subjetivas del apoderado, no obstante, el sr Bolaños Hurtado sufrió un accidente de trabajo.

Al hecho 5: No es un hecho, se trata de una afirmación subjetivas que deberán ser probados en el transcurso del proceso.

Al hecho 6: Es cierto de acuerdo con la prueba arrimada al proceso.

Al hecho 7: No es un hecho, se trata de la descripción de quien en vida fue el sr Bolaños Hurtado, edad, escolaridad y relación filiar.

Al hecho 8: No es un hecho se trata del requisito de procedibilidad .

RAZONES DE LA DEFENSA

Liminarmente nos referiremos al marco normativo y jurisprudencial, a fin de emprender en orden jurídicamente lógico el correspondiente estudio.

Es entonces, el artículo 90 Superior que prevé cuándo será el Estado responsable patrimonialmente por daños antijurídicos, norma que a su tenor dispone:

"ARTICULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas."

En Sentencia del 5 de octubre del año en curso, la Subsección C, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para resolver el asunto puesto a su conocimiento a través del recurso de alzada, interpretó el precitado texto Constitucional, señalando que:

"La responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, se fundamenta en dos elementos, a saber: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico."

"El inciso primero del texto constitucional antes señalado, es del siguiente tenor literal:

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas."

"(...)" (cursivas fuera del texto original).

"Y es así, como la jurisprudencia de esta corporación lo ha entendido, diciendo lo siguiente:

"porque a términos del artículo 90 de la constitución política vigente, es más adecuado que el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona jurídica de derecho público."

"La objetivización del daño indemnizable que surge de este precepto constitucional, como lo ha repetido en diversas oportunidades la Sala, sugiere que, en lógica estricta, el juez se ocupe inicialmente de establecer la existencia del daño indemnizable que hoy es objetivamente comprobable y cuya inexistencia determina el fracaso ineluctable de la pretensión".

"Por consiguiente, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa es lo relativo a la existencia del daño, por cuanto si en el proceso no se logra establecer la ocurrencia de este, se torna inútil cualquier otro análisis y juzgamiento."

"Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores⁽¹⁹⁾, el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos."



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIÓN JURÍDICA

"Así las cosas, es claro que la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado —en materia contractual y extracontractual—, contenida en el artículo 90 ibídem, se soporta única y exclusivamente en los elementos antes referidos de daño antijurídico e imputación.

"La Corte Constitucional refiriéndose a la posición asumida por la sección tercera de esta corporación, ha precisado los alcances del inciso primero artículo 90 de la Carta, en los siguientes términos:

"Son dos las condiciones indispensables para la procedencia de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la imputabilidad del daño a alguna de ellas.

"La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar."¹

Siguiendo los lineamientos precisados en la citada jurisprudencia, se impone iniciar por analizar en este caso la existencia del daño, como elemento principal, que abre paso al estudio de los demás elementos, si se responde de manera positiva a la pregunta acerca de su existencia.

Frente al daño antijurídico

Ahora bien, en cuanto al concepto de daño, vale traer a cita lo señalado en la obra "EL DAÑO", compilación y extractos José N. Duque Gómez:

"La certeza hace alusión a la verdad de su existencia, como concepto opuesto a todo lo que es hipotético, posible o eventual. Para que el daño sea indemnizable es requisito indispensable que sea cierto, verdadero e incuestionable."

"...Lo contrario a la certeza es la incertidumbre que se presenta cuando no hay seguridad sobre la real existencia del perjuicio que se invoca; se dice que el daño es incierto cuando los elementos de juicio de que dispone son insuficientes para sustentar su causación. En esta situación de incertidumbre el daño no es reparable y así lo tiene plenamente establecido nuestra jurisprudencia".

Este criterio, encuentra consonancia con lo establecido en el artículo 177 del CGP, norma general del Régimen Probatorio, según el cual, *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."*

Es de concretar que en el presente caso, los perjuicios en relación con los cuales se pretende obtener indemnización, son los relacionados con la afección en la integridad física y psicológica del actor y su familia, de los cuales se desprenden, en esencia, todas las pretensiones de la demanda.

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia 1997-04160 de octubre 5 de 2011 C.P. Olga Mérida Valle de De La Hoz

Se allegaron con la demanda las siguientes pruebas:

Acta de Inspección Técnica Cadáver –FPJ-10.2º.-Constancia Fiscalía General de la Nación sobre existencia de investigación. 3º.-Copia del protocolo de necropsia.4º.-Orden de archivo Fiscalía General de la Nación.5º.-Registro civil de defunción del fallecido.6º.-Declaración extra juicio sobre convivencia en unión libre del señor JHON DUARDO BOLAÑOS (q.e.p.d.) y DIANAMARIA ORDOÑEZ CAMPO.07º.-Registro civil de nacimiento del fallecido.08º.-Registro civil de nacimiento de la hija del fallecido.09º.-Registro civil de nacimiento de los hermanos del fallecido.10º.-Fotografías del lugar del accidente.11º.-Certificación sobre agotamiento del SOAT en la clínica Cristo Rey. Requisito de procedibilidad (Acta de no conciliación Procuraduría).13º.-Poderes para actuar.14º.-copias de certificación de Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Control Interno de Vital Center S.A.S. y Copia de la Tarjeta de Propiedad de la motocicleta que conducía el hoy occiso

"2) TESTIMONIALES:

Se sirva citar al Despacho... para que depongan sobre las circunstancias de hecho del accidente

Se cite y se haga comparecer a los señores ANDRES LUNA, conductor del vehículo tipo ambulancia de placas VCI 272 y BRIGGITE OJEDA, Paramédicos, ALEJANDRO VALENCIA MARTINEZ, identificado con la C.C 16.932.519 y a la señora AUDREY VIVIANA POSSO, con C.C No. 38.556.955 y MARUENGAMARRA DE LA ROSA, identificado con la C.C 94.456.848

En cuanto a las lesiones que presuntamente sufrió el demandante, se logra advertir que se allegó pruebas que dan cuenta de las lesiones sufridas, esto es cumplen con las condiciones necesarias de pertinencia, conducencia y eficacia, para ostentar poder de convicción en relación con el hecho que se pretende probar. Estas condiciones pueden ser definidas así:

"La pertinencia o relevancia consiste en que haya alguna relación entre el medio probatorio y el enunciado fáctico que se pretende someter a prueba, de manera que pueda influir en la decisión correspondiente..."

(...)

"Prueba eficaz es la que resulta efectivamente útil para llevar a la convicción del juez, derivada de criterios de valoración racionales...En suma, la eficacia de la prueba se establece efectuada su valoración o apreciación."²

De cara a las tres condiciones precitadas, se deberán analizar las pruebas allegadas con la demanda.

Y finalmente, no existe evidencia de IPAD - Informe Policial de Accidentes de Tránsito – que determine hipotéticamente las circunstancias de modo tiempo y lugar de cómo sucedió el accidente o la causa del accidente del señor JHON EDUARDO BOLAÑOS HURTADO.

² Prueba Judicial – Análisis y Valoración, Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla", Pág. 31, 34 y 35.

Frente a la imputabilidad

Corresponde entonces a la parte demandante, demostrar en este punto, que existió la falla en el servicio, así como que la misma haya sido la causa que dio lugar al daño antijurídico generado.

En relación con el tema, el Consejo de Estado en sentencia de octubre de 1.995, Expediente 9535, señaló:

"Por lo anterior, los hechos objeto del proceso deben manejarse dentro del régimen de la falla ordinaria o probada, en el cual al demandante le incumbe la demostración de todos los elementos que configuran la responsabilidad estatal.

"Y, toda vez que se imputa una omisión administrativa, la parte actora debe, además de probar la existencia del perjuicio y su relación de causalidad con la omisión de la cual él se deriva, acredita la existencia de la obligación legal o reglamentaria que imponía a la administración la realización de la conducta con la cual los perjuicios no se habrían producido. O, lo que es lo mismo, debía acreditar la existencia de la falla del servicio consistente en el cumplimiento de un deber y demostrar que dicha falla fue la causante del daño".

Será entonces lo propio, que el demandante demuestre inicialmente que en efecto existió la falla en el servicio, así como el nexo causal entre ésta y el daño.

En cuanto a la falla en el servicio, se logra advertir que la única evidencia que se refiere a este tema, es la investigación del fiscal 35 de la unidad de vida, en el que archiva la investigación CONCLUYENDO LA culpa exclusiva de la víctima.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar las situaciones planteadas en el traslado de la demanda a saber:

En la responsabilidad administrativa por falta o falla del servicio y de conformidad con los parámetros sobre los cuales fue inicialmente estructurada esa teoría se dan tres elementos constitutivos esenciales, a saber: una falta o falla del servicio que debe ser plenamente acreditada; un daño y una relación de causalidad entre la falla y el daño. La esencialidad de esos tres elementos llega al extremo de que faltando uno de ellos no se configura la responsabilidad administrativa.

Con fundamento en la única prueba arrimada al traslado obrante en el expediente, se encuentra debidamente acreditado que:

según necropsia del : INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES INFORME PERICIAL DE NECROPSIA N°. 2019010176001002750 Regional: SUROCCIDENTE Seccional: VALLE DEL CAUCA U. Básica: GALI Nombre Definitivo: JHON EDUARDO BOLAÑOS HURTADO Nombre al Ingreso: JHON EDUARDO BOLAÑOS HURTADO Tipo de documento: CÉDULA DE CIUDADANÍA No. de documento 94425127 Edad: 44 años Sexo: MASCULINO Procedencia: CALI, VALLE DEL CAUCA Fecha de ingreso: 1411212019 Hora: 1B:15 Noticia Criminal: 7600160001 93201915379 Acta Numero: No Aplica Autoridad:

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Fecha muerte: 13 12 2019 20:00 Fecha necropsia: 1511212019 Hora 09:00 Prosector: ALEJANDRO SANDOVAL ARAMBURO Auxiliar de morgue: OMAR ERNESTO CHINCHAJOA CARPIO

-“ Resumen de hechos: Según acta de inspección accidente de tránsito peatón contra vehículo el 6-12-2019 es trasladado a clínica Cristo Rey donde hacen diagnóstico de ingreso choque medular trauma raquimedular fractura apófisis espinosas C6,C7,T1 ,T2,TB trauma cerrado de tórax neumotórax más del 50% hemotórax izquierdo contusión pulmonar trauma crónico leve herida escalpo. Durante hospitalización documental hemorragia intracraneana requiriendo drenaje quirúrgico también presenta anemia con hemoglobina de 3 por hemotórax residual, presentó deterioro neurológico hasta la muerte encefálica, el día 13-12-2019 grupo de trasplante le realiza protocolo de rescate de órganos, - Hipótesis de manera aportada por la autoridad: Accidente de transporte – H”

De acuerdo con lo expuesto, está claro que la situación planteada en la demanda debe resolverse a través de la teoría de la falla del servicio, pero la parte actora no prueba en el proceso, primero la omisión de la Administración y segundo el nexo causal, pues no basta con afirmar que el señor BOLAÑOS HURTADO perdió el control de la moto por ocasión de un hundimiento ubicado en la vía.

En esa panorámica, el daño no ostenta la naturaleza de cierto, actual y determinado, motivo adicional para predicar el cumplimiento de los preceptos normativos contenidos en el artículo 90 de la Constitución Política, necesarios para sustentar el acaecimiento del mismo.

Por tanto una vez establecida la existencia del daño antijurídico, abordado por la Justicia Contenciosa Administrativa, el análisis de la imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, si es deber jurídico de ésta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y, en consecuencia, si se debe indemnizar.

De conformidad con el acervo probatorio, es claro que, en el caso concreto, no existe forma de atribuir fáctica, ni jurídicamente el daño endilgado a la entidad pública demandada, toda vez que no se encuentra suficientemente demostrado que el origen de la lesión que causó la muerte del señor JHON EDUARDO BOLAÑOS HURTADO, hubiese sido ocasionada por una actuación de la administración como pretende endilgar el apoderado, y que hubiese derivado en la producción de los graves daños que se acaban de relacionar, es decir, no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas.

Por tanto, no hay prueba alguna dentro del expediente que permita establecer que la ocurrencia del hecho dañino resulte jurídicamente imputable a la entidad pública en cuestión como lo entienden los demandantes y mucho menos que el incumplimiento de tal contenido obligacional a cargo de la Administración pueda tenerse como una imputación adecuada del daño, en la medida en que no concurrió a determinarlo y, por ende, no se puede comprometer la responsabilidad del Distrito de Santiago de Cali pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil, sólo quienes concurren a la producción del daño deben responder solidariamente del mismo, cosa que no acontece en el presente caso.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que, en casos como el que es objeto de estudio en el presente asunto, el título de imputación aplicable es el de la falla del servicio.



El Consejo de Estado, Sección Tercera, mediante la Sentencia de agosto 16 de 2007, expediente No. 30114, Radicado 41001233100019930758501, M.P Dr. Ramiro Saavedra Becerra, en sus consideraciones explica ampliamente el tema sobre *el régimen de responsabilidad del Estado* al que obedece tal acción, veamos algunos apartes relacionados con el tema:

EL DAÑO ANTIJURICO:

El régimen de responsabilidad del Estado al que obedece tal acción, tiene su fundamento en el artículo 90 de la Constitución de 1991, que le impone a aquél el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es decir, el elemento fundamental de la responsabilidad es la existencia de un daño que la persona no está en el deber jurídico de soportar.

Se debe tener en consideración que los daños imputables al Estado pueden provenir de una conducta –activa u omisiva- lícita o ilícita y, a tales efectos la jurisprudencia aplica los títulos de imputación de responsabilidad que, de tiempo atrás, ha ido decantando: falla probada del servicio, riesgo excepcional y ocasionalmente daño especial, ya que ellos facilitan el proceso de calificación de la conducta estatal y la determinación del nexo causal entre el daño y aquélla.

Ahora bien, de una lectura literal del artículo 90 C.P., es posible entender que el régimen de responsabilidad allí consagrado es un régimen eminentemente patrimonial, en el sentido de que el Estado presta su garantía pecuniaria a los daños que en el ejercicio de su actividad pueda causar a los particulares. Sin embargo, es importante precisar que una interpretación sistemática del texto constitucional lleva a una conclusión más amplia.

En efecto, al analizar el régimen de responsabilidad del Estado por daños, no se puede perder de vista que la Constitución de 1991 es garantista de la dignidad humana y de los derechos humanos^{3[1]} y propende porque éstos abandonen su esfera retórica para convertirse en una realidad palpable, por lo tanto, es de mayúscula importancia que a través de la responsabilidad, el juez de lo Contencioso Administrativo adelante una labor de diagnóstico de las falencias en las que incurre la Administración y al mismo tiempo, una labor de pedagogía a fin de que aquellas no vuelvan a presentarse, sobre todo si los daños por los cuales se responsabiliza al Estado, a través de un título de imputación, vulneran en alguna medida los derechos humanos o la dignidad de las personas^{4[2]}.



Además, la reparación de los daños que comprende la lesión a los derechos humanos, no se agota con el simple resarcimiento o la compensación económica, es importante que el juez además, adopte medidas –en cuanto su ámbito de competencia lo permita- a través de las cuales las víctimas efectivamente queden indemnes ante el daño sufrido, conozcan la verdad de lo ocurrido, recuperen su confianza en el Estado y tengan la certeza de que las acciones u omisiones que dieron lugar al daño por ellas padecido no volverán a repetirse.

Al respecto es importante tener en cuenta que una noción amplia de reparación va más allá de la esfera estrictamente pecuniaria del individuo, pues en ella se deben incluir los bienes jurídicos -como es el caso de la dignidad y los derechos humanos- que generalmente no pueden ser apreciados monetariamente, pero que, si resultan lesionados por el Estado, deben ser reparados mediante compensación. Solo así el principio de la reparación integral del daño cobra una real dimensión para las víctimas^{5[3]}.

Cabe resaltar además que éstos derechos no solo se reconocen como inviolables en el ordenamiento jurídico interno, sino también en instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos que, al ser aprobados por el Congreso colombiano, de conformidad con el artículo 93 C.P., prevalecen en el orden interno. Por lo tanto, si son quebrantados por el Estado a través de sus diferentes órganos, por acción o por omisión, las conductas infractoras constituyen per se un incumplimiento de las obligaciones que el Estado colombiano asumió frente a la comunidad internacional y por tanto, pueden llegar a comprometer su responsabilidad, no solo en el ámbito interno, sino también a nivel internacional^{6[4]}.

Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado Parte desde el 31 de julio de 1973^{7[5]} y que consagra la obligación de los estados miembros de respetar los derechos humanos consagrados en ella y en los demás instrumentos que la complementen, reformen o adicionen.

La anterior óptica debe ser tenida en cuenta por el juez de lo Contencioso Administrativo al momento de verificar si se configura o no la responsabilidad de la Administración en cada caso concreto, sea cual fuere el título de imputación que se emplee.

EL TITULO DE IMPUTACION

Cuando se debate la ocurrencia de un daño proveniente del ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la manipulación de armas de dotación oficial, el título de imputación bajo el cual se resuelve la controversia es el objetivo de



riesgo excepcional; sin embargo, cuando se advierte que el daño no se produjo accidentalmente sino, por un mal funcionamiento de la Administración, ello se debe poner de presente y el título de imputación bajo el cual se definirá el litigio, es el de falla del servicio⁸[6]. En aras del cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que tiene el juez al definir la responsabilidad del Estado y, a fin de que éste pueda repetir contra el agente que dolosa o culposamente produjo el daño, en caso de ser condenado a la correspondiente reparación.

En el régimen de imputación subjetivo de responsabilidad denominado falla del servicio probada, la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos necesarios: i) **el daño sufrido por el interesado; ii) la falla del servicio propiamente dicha, consistente en el mal funcionamiento del servicio porque éste no funcionó cuando debió hacerlo o, lo hizo tardía o equivocadamente y; iii) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio.**

Una vez presentes tales elementos, la entidad pública demandada solo podrá exonerarse de una declaratoria de responsabilidad si prueba que su actuación fue oportuna, prudente, diligente y con pericia, es decir, que no hubo falla del servicio o; si logra romper el nexo causal, mediante la acreditación de una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o, hecho también exclusivo y determinante de un tercero.

CAUSAL EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD EN FALLA DEL SERVICIO

Ha dicho la Sala que el hecho de la víctima puede ser considerado como causal excluyente de responsabilidad si se **prueba**, no sólo que la víctima participó en la realización del daño, sino que entre su actuación y el daño existe una relación de causalidad adecuada⁹[7], entendida ésta como aquella causa idónea, eficiente y preponderante, cuya consecuencia directa e inmediata es el daño mismo:

"...la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño."¹⁰[8]."

Deberá entonces probar el demandante, que si en efecto existía un desnivel en la vía, el origen de éste escapaba a una causa legítima, así como que ausente estaba la vía de señalización acerca de su existencia.

Se logra advertir que ninguna de las pruebas que se pretende hacer tiene como objeto los antes señalados, lo que permite afirmar, que la falla en el servicio, se encuentra huérfana de prueba. si se tiene en cuenta que los hechos según la Fiscalía 35 seccional de la Unidad de Vida dan cuenta de una culpa exclusiva de la víctima.

En cuanto al nexo causal

El demandante pretende hacer ver que existe relación entre el presunto accidente acaecido el día 6 de diciembre de 2019, y la supuesta falla del servicio consistente en la existencia de un desnivel.

Ahora bien, la Ley 769 de 2002, *"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones"*, prevé en su artículo 94, entre las normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, la de *"transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo."*

Conforme lo señalado, evidentemente resulta que se desconoce todas las circunstancias del accidente tales como: el conductor en este caso contravino la Ley?, transitando por espacio diferente al que la norma tiene destinado para vehículos como el que el conducía, por tanto fue su inadecuado proceder, el que lo puso en la circunstancia que ahora pretende endilgar al Municipio?. Aceptar esta ilegítima postura, se traduciría en pretermisión del principio general del derecho *"Nemo auditur propriam turpitudinem allegans"*, según el cual nadie puede obtener provecho de su propia culpa.

En efecto, prevé el artículo 74 del Código de Tránsito, que:

"Los conductores deben reducir la velocidad a treinta (30) kilómetros por hora en los siguientes casos:

*"En lugares de concentración de personas y en **zonas residenciales.***

"En las zonas escolares

"Cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad.

"Cuando las señales de tránsito así lo ordenen.

"En proximidad a una intersección." (Subraya fuera del texto)

Por otra, parte, prevé el precitado artículo 94 también:

"Los conductores y los acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte."

El artículo 1º de la misma normatividad, al definir esta pieza, indica:



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIÓN JURÍDICA

"Casco: Pieza que cubre la cabeza, especialmente diseñada para proteger contra golpes, sin impedir la visión periférica adecuada que cumpla con las especificaciones de las normas lcontec 4533 "Cascos Protectores para Usuarios de Vehículos", o la norma que la modifique o sustituya."

Del resultado de la necropsia del INSTITUTO NACTONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES INFORME PERICIAL DE NECROPSIA N°. 2019O1O176001OO2750 de JHON EDUARDO BOLAÑOS HURTADO Noticia Criminal: 7600160001 93201915379 Acta Numero: No Aplica Autoridad: SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE Fecha muerte: 13 12 2019 20:00 Fecha necropsia: 1511212019 Hora 09:00 Prosector: ALEJANDRO SANDOVAL ARAMBURO se advierte :

"Según *acta de inspección accidente de tránsito peatón contra vehículo el 6-12-2019 es trasladado a clínica Cristo Rey donde hacen diagnóstico de ingreso choque medular trauma raquimedular fractura apófisis espinosas C6,C7,T1 ,T2,TB trauma cerrado de tórax neumotórax más del 50% hemotórax izquierdo contusión pulmonar trauma crónico leve herida escalpo. Durante hospitalización documental hemorragia intracraneana requiriendo drenaje quirúrgico también presenta anemia con hemoglobina de 3 por hemotórax residual, presentó deterioro neurológico hasta la muerte encefálica, el día 13-12-2019 grupo de trasplante le realiza protocolo de rescate de órganos, - Hipótesis de manera aportada por la autoridad: Accidente de transporte - H*

Del lugar en que se ubican las lesiones, se logra evidenciar que fueron contundentes y ocasionaron el fallecimiento del sr Bolaños Hurtado.

Como bien se puede ver, el cumplimiento estricto de la normatividad anotada, hubiera dado un desenlace por entero diferente al que ahora trae la sra Ordoñez Campo, pues para empezar, si transitara por la zona correcta de la vía, no se hubiera topado con el presunto desnivel, la velocidad adecuada permitiría hacer frente a cualquier obstáculo en la vía, ya sea frenando o esquivando, y finalmente la utilización del casco, impediría lesiones en su cara o cabeza. Ahora, si a pesar del cumplimiento de estas disposiciones, que valga indicar están diseñadas para evitar accidentes, uno de estos ocurriera, evidentemente obedecería a las inadecuadas condiciones de la capacidad de reacción.

FRENTE A LOS PERJUICIOS

Pretende el actor obtener el pago de perjuicios "*Materiales... Daño a la Vida de Relación...*", a cargo del Municipio de Santiago de Cali.

Ahora bien, conforme a la precedente argumentación, dirigida a desvirtuar la existencia del daño antijurídico, la falla del servicio, y el nexo causal entre estos, una condena la Administración carecería de sustento, y por tanto devendría ilegítima.

Como se dijo, huérfano de prueba se encuentran los perjuicios presuntamente sufridos por el señor Bolaños Hurtado, así como el nexo causal que también debe acreditarse por la parte demandante, a lo que se suma la clara existencia de una causal excluyente de responsabilidad.

Ruego entonces al señor Juez, despachar desfavorablemente las pretensiones de la parte actora, absolviendo de cualquier condena al Distrito de Santiago de Cali.

En conclusión:

- El señor Bolaños estaba desarrollando una actividad considerada como peligrosa, (la conducción de moto) y en el ejercicio de una actividad peligrosa como la desplegada por el , le obliga a una Razonable Precaución que se debe tener al transitar por una vía.
 - Carece el proceso de acervo probatorio para determinar cómo conducía su vehículo de tracción si por el lado derecho o izquierdo de la vía tal y como lo ordena el Código nacional de Tránsito, a qué velocidad transcurría ni las previsiones adoptadas para su conducción.
 - De igual manera, conducir un vehículo inestable como la motocicleta dificulta la capacidad de maniobra y le resta pericia al conductor, razón que bien pudo originar el hecho dañoso.
 - Se trata de la falta de pericia del actor para ejercer una actividad peligrosa, que, se reitera, estaba desarrollando en contravención de las normas o reglamentos establecidos.
 - Este elemento resulta de vital importancia para que surja la responsabilidad, el cual debe darse en forma manifiesta y precisa entre el hecho y el daño.
 - En el caso subjudice no se observa nexo causal alguno por cuanto si bien hubo daño (el fallecimiento del señor Bolaños Hurtado) no se conocen las condiciones de modo tiempo y lugar de como sucedieron los hechos , lo que se advierte es una el resultado de necropsia del Instituto de Medicina Legal, por cuanto el medico Dr. Sandoval Aramburo advierte que se trata según acta de inspección accidente de transito PEATON CONTRA VEHICULO . POR TANTO NO HAY HILACION ENTRE LO NARRADO EN LOS HECHOS Y EL INFORME PERICILA DE NECROPSIA . Y en esos términos no se compadece con el deber de probar que efectivamente fue este hundimiento el causante del daño y que la víctima no participó activamente en el resultado dañoso.
 - No le corresponde al Municipio de Santiago de Cali precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente sino a quien afirma y realiza tal imputación de responsabilidad.
 - Tal como se mencionó anteriormente, la duda sobre la falla del servicio y aún más la duda sobre si fue esa presunta falla (entiéndase desnivel o hundimiento) es el causante del daño, no permite configurar el nexo causal que se exige para predicar responsabilidad del Ente Municipal.
 - Si nos atenemos al acervo probatorio allegado con la demanda se tiene claridad respecto a la fecha en que presuntamente ocurrió el accidente, la hora, no obstante las circunstancias del modo como transcurrió el accidente no es Coincidente con la investigación y la causa relatada en el resultado de la necropsia.

- Este elemento resulta de vital importancia para que surja la responsabilidad, el cual debe darse en forma manifiesta y precisa entre el hecho y el daño.
- El daño antijurídico y su imputación a la entidad demandada
- Tal como se demostró, el daño antijurídico aducido en la demanda, consistente en las lesiones sufridas por el actor, el 06 de diciembre de 2019, como consecuencia de un accidente. La prueba que da cuenta de esta circunstancia es, precisamente, el respectivo resultado de necropsia tomado al cadáver del señor Jhon E. Bolaños H. informe policial en el cual se señaló que, en la fecha ya mencionada, el occiso fue impactado por colisionar contra un vehículo.

En lo que atañe a las fallas del servicio señaladas por los demandantes, en el proceso quedó establecido solo por consideraciones o suposiciones del apoderado de los actores que la senda vial que fue escenario del daño carecía de mantenimiento. Sin embargo, no está probada la relación causal entre estas circunstancias y el accidente sufrido por Bolaños Hurtado, de modo que no concurren los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en el presente caso.

EXCEPCIONES:

CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA

La cual sustento por cuanto, quedo probado de la investigación de la fiscalía 35 seccional de unidad de vida No 7 6 0 0 1 6 0 0 0 1 9 3 2 0 1 9 1 5 3 7 9, que los daños que sufrió el sr Bolaños Hurtado según la evidencia allegada a la investigación devienen compatibles con muerte violenta en accidente de tránsito.

Según la investigación de la fiscalía 35 seccional de unidad de vida, que se encuentra archivada determino: "la muerte violenta del hoy occiso ocurre en el contexto de un accidente de tránsito según lo reporta el acta de levantamiento de cadáver y el Informe Ejecutivo, fallece por múltiples lesiones en accidente de tránsito, más no se logra establecer fehacientemente las circunstancias precisas de tiempo, modo y lugar, ni si la motocicleta mencionada efectivamente estuvo involucrada en los hechos por la inexistencia de inspección a vehículo, ya que no hay reporte de autoridad de tránsito, el hecho no fue conocido por autoridad de tránsito. Teniendo en cuenta las circunstancias temporo-espaciales y modales amalgamantes del suceso, la modalidad culposa sería en principio, la forma de culpabilidad donde tendría cabida la adecuación típica o encaje descriptivo al fluir del acervo los basamentos necesarios descartando orientación de propósito hacía un fin penalmente relevante, por lo cual la discusión debe centrarse teniendo como marco de referencia la definición de culpa traída por el canon 23 del Código Penal: "La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo". Los daños corporales sufridos por la víctima según las evidencias allegadas a la investigación, devienen compatibles con muerte violeta en accidente de tránsito, circunstancia que nos lleva a consentir el uno de los aspecto objetivo del delito, pero se desconoce las circunstancias que lo rodean, solamente se cuenta con el reporte paramédico que indica presume sufrió al parecer volcamiento la víctima por la pérdida de

control al pasar por desnivel de la vía; en ese orden de ideas, permisible deviene predicar la concurrencia de un hecho atípico.”

Inexistencia del Daño Antijurídico

En cuanto a las lesiones que presuntamente sufrió el sr Bolaños Hurtado Bolaños, como se dijo, no se aportó o pidió prueba alguna que cumpliera con las condiciones necesarias de pertinencia, conducencia y eficacia, para ostentar poder de convicción en relación con el hecho objeto de prueba.

Y finalmente, no existe evidencia como el PAC -Informe Policial de Accidentes de Tránsito que de cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar

Ausencia de la falla en el servicio

Carece de evidencia la demanda, dirigida a establecer la existencia de un desnivel, que se pretende hacer ver como falla en el servicio. Como se señaló anteriormente, sin el Informe de Policía de Tránsito, resulta bastante débil para responsabilizar al Municipio de Cali , de aceptar como cierta la existencia del desnivel o hueco, ello automáticamente se tradujera en una falla del servicio.

“(…)”

Se colige de lo expuesto que definitivamente no es el Municipio de Santiago de Cali, el llamado a responder por este perjuicio que logren demostrar los actores dentro de este proceso.

Frente a la cuantía, es preciso tener en cuenta que el patrimonio afectado con el hecho dañoso debe recibir como indemnización el monto de su disminución y no un valor exagerado que proviene de la voluntad ilimitada del actor en la que no existe un razonamiento adecuado de su material probatorio.

INNOMINADA

La fundamento en todos los hechos exceptivos que demostrados en el proceso sean favorables a la parte que represento.

PRUEBAS

Ruego tener en cuenta y ordenar la práctica de las siguientes pruebas:

A. TESTIMONIALES.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIÓN JURÍDICA

Solicito señor juez, se decrete el testimonio del señor AGENTE DE TRANSITO JHON HENRY ESTACEY Coordinador del grupo Criminalística para que declare lo que le consta y reposa en los archivos de Movilidad – Criminalística sobre el accidente del señor Jon Eduardo Bolaños Hurtado (QEPD) el día 06 de diciembre de 2019. y así brindar mayor información en relación con lo consignado en el Archivo de la investigación de la fiscalía. Y así mismo aporte al Despacho las diligencias que custodia del occiso.

B. INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito señor Juez se cite a interrogatorio de parte al Médico que practico la necropsia Dr Sandoval Aramburo, para lo cual se presentará el correspondiente interrogatorio el día de la diligencia.

B: DOCUMENTALES – ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

- Solicito al señor Juez SOLICITE A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD – Criminalística aporte copia del archivo de la fiscalía fiscalía 35 seccional de unidad de vida No 7 6 0 0 1 6 0 0 0 1 9 3 2 0 1 9 1 5 3 7 9 que posee ya que por ser custodia se remite directamente al Despacho. dar valor probatorio a las pruebas (Antecedente administrativo) aportadas por la parte la Secretaria de Movilidad que evidencia material fotográfico sin bosquejo topográfico por cuanto no existe IPAD.

En escrito separado a esta contestación de demanda se está efectuando llamamiento en garantía de la ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS SUCURSAL CALI. QUE AMPARA EL RIESGO, así como las coaseguradas cedidas PROSEGUROS, DELIMA MARSH S.A. Y WILLIS COLOMBIA DE LA VIGECIA DEL 29 DE MAYO DE 2019 HASTA EL 23 DE ABRIL DE 2020.

ANEXOS

Anexo al presente escrito los siguientes documentos:

- Poder con sus respectivos anexos.
- Demanda anexos
- Llamamiento en garantía con sus anexos

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES:

El señor Alcalde Distrital I puede ser notificado en su despacho, ubicado en el tercer piso del Centro Administrativo Municipal CAM, Torre Alcaldía.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DIRECCIÓN JURÍDICA

Las que a mi corresponden, las recibiré en el CAM, Torre Alcaldía, piso noveno, Departamento jurídico de la Alcaldía en mi calidad de apoderada judicial del Municipio de Santiago de Cali. Correo electrónico notificacionesjudiciales@cali.gov.co o el institucional gloria.perez@cali.gov.co

De la señora Juez, Respetuosamente

GLORIA AMPARO PÉREZ PAZ

C.C. 31.853.521

T.P. 62.510 Consejo Superior de la Judicatura